CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRAMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
28 DIC. 2022
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:17 h.

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N° 502/2021-CR, QUE SANCIONA CON CADENA PERPETUA TODAS LAS MODALIDADES DEL DELITO DE FEMINICIDIO

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el **Proyecto de Ley N° 502/2021-CR,** Ley que sanciona con cadena perpetua todas las modalidades del delito de Feminicidio, presentado por la Congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas en representación del Grupo Parlamentario "AVANZA PAÍS", con la facultad que establece el Artículo 107 de la Constitución Política del Estado y los Artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso

Después del análisis y debate correspondiente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en su Undécima Sesión Ordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 2022, acordó por **UNANIMIDAD**, la **NO APROBACIÓN** del presente dictamen.

Con el voto a favor de los congresistas presentes: GONZA CASTILLO Américo, BALCAZAR ZELADA José María, PAREDES GONZALES Alex Antonio, ALEGRIA GARCIA Arturo, ALVA PRIETO María del Carmen, CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa, CRUZ MAMANI Flavio, ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot, GUERRA GARCÍA Campos Hernando[1], JUÁREZ GALLEGOS Carmen Patricia, MORANTE FIGARI Jorge Alberto, MUÑANTE BARRIOS Alejandro, SOTO PALACIOS Wilson y TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina[2].

I SITUACIÓN PROCESAL

a. Antecedentes procedimentales

El Proyecto de Ley N° 502/2021-CR fue presentado el 20 de Octubre del 2021, siendo decretado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el 21 de Octubre de 2022, en calidad de única comisión dictaminadora.

b. Antecedentes Parlamentarios

- Proyecto de Ley 07658/2020-CR, que modifica el Artículo 108-b del Código Penal y precisa el alcance del delito de feminicidio.
- Proyecto de Ley 07044/2020-CR, que incorpora la condición de desaparecida de la víctima como agravante en los delitos de feminicidio y propone la aplicación de la cadena perpetua para todos los delitos de feminicidio agravada, así como plantea la incoación del proceso inmediato por feminicidio en flagrancia y en casos de

[1] *Voto a favor consignado mediante oficio N° 046-2022-2023-HGGC/CR*
[2] *Voto a favor consignado mediante oficio N° 0063-2022-2023-AJTG/CR*

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2022 18:27:38-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MUÑANTE BARRIOS Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/12/2022 10:02:08-0500

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en flagrancia.

- Proyecto de Ley 05940/2020-CR, que modifica el Artículo 108-b, del Código Penal referido a la aplicación de cadena perpetua por el delito de feminicidio.
- Proyecto de Ley 05159/2020-CR, que modifica el artículo 108-b del Código Penal. Aprobado por decreto legislativo 635 y aplica la cadena perpetua para el delito de feminicidio.
- Proyecto de Ley 02827/2017-CR, que modifica el artículo 108-b del Código Penal referida al feminicidio agravado producido en espacios públicos afectando directamente a terceras personas

c. Opiniones e informaciones solicitadas

Se ha solicitado opinión a las siguientes instituciones:

PROYECTO DE LEY	OFICIO	INSTITUCION	FECHA
502/2021-CR	Of. P.O. N° 155-2021-2022-CJYDDHH/CR	Ministro de Justicia y Derechos Humanos	29/10/2021
	Of. P.O. N° 156-2021-2022-CJYDDHH/CR	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	29/10/2021
	Of. P.O. N° 157-2021-2022-CJYDDHH/CR	PODER JUDICIAL	29/10/2021
	Of. P.O. N° 158-2021-2022-CJYDDHH/CR	MINISTERIO PÚBLICO	29/10/2021
	Of. P.O. N° 159-2021-2022-CJYDDHH/CR	DEFENSOR DEL PUEBLO	29/10/2021
	Of. P.O. N° 638-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	Ministro de Justicia y Derechos Humanos	15/02/2022
	Of. P.O. N° 639-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	15/02/2022
	Of. P.O. N° 640-2021-2022-CJYDDHH/CR REITERATIVO	MINISTERIO PÚBLICO	15/02/2022

II.- CONTENIDO DE LAS PROPUESTA

- **El Proyecto de Ley N°. 502/2021-CR**, tiene por objeto modificar el Artículo 108-B, del Código Penal.

El proyecto de Ley, materia de análisis propone modificar el *" Artículo 108-B.- Feminicidio* que dice: "*Será reprimido con pena privativa de libertad de **cadena perpetúa** el que mata a una mujer por su condición de tal", en cualquiera de los siguientes contextos:*

1. Violencia familiar.
2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual.
3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente.
4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.
5. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor.
6. Si la víctima se encontraba en estado de gestación.
7. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente.
8. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.
9. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad.
10. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana.
11. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.
12. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente.
13. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.

En todas las circunstancias previstas en el presente Artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del Artículo 36 del presente Código y los Artículos 75 y 77 del Código de los niños y Adolescentes, según corresponda.

De acuerdo con la normativa vigente, los proyectos materia de análisis es una ley merituada con base al ejercicio del derecho de iniciativa en la formación de leyes que confiere el artículo 107de la Constitución Política del Perú, cuyo contenido se encuentra vinculado al tema de Justicia, por lo que su estudio y dictamen corresponde en efecto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

III.- MARCO NORMATIVO

3.1. Legislación Nacional

- Constitución Política del Perú de 1993, publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 30 de diciembre de 1993.
- Código Penal.
- Reglamento del Congreso de la República.

- Decreto Legislativo N·1368, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
- Ley N·30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar.
- Decreto Legislativo 1323, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género.
- Decreto Legislativo 1470, Decreto Legislativo que establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el Covid-19.
- Ley 30963, que modifica el Código Penal respecto a las sanciones del delito de explotación sexual en sus diversas modalidades y delitos conexos, para proteger con especial énfasis a las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

3.2. Legislación Comparada

Artículo 80 del Código Penal Argentino dice:
Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia.

3.3. LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)

Artículo 1º.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

El articulo 3º de la Convención de Belém do Pará, estatuye que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Los artículos 7° y 8° establecen un conjunto de medidas que deben tomar los Estados para combatir la violencia contra la mujer. Una de las obligaciones de los Estados es la de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar ese tipo de violencia (artículo 7° b). Otro de los compromisos que han adoptado los Estados es garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenirla, sancionarla y eliminarla (artículo 8º h).

El artículo 12" de la Convención de Belém do Pará, establece la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recibir peticiones

IV.- FUNDAMENTOS DE LA INICIATIVA LEGAL

En la exposición de motivos del Proyecto de Ley, se detalla los motivos que sustentan la iniciativa legislativa y son:

Una de las estipulaciones de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (en adelante Convención de Belém Do Pará) es que los Estados Parte, como es el caso de Perú, están obligados a adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. En virtud de ello y según el Tercer Informe de seguimiento a la Implementación de las recomendaciones del comité de expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), entre el 50 y 60 por ciento de las mujeres de los Estados Miembros de dicha convención han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida y el hogar sigue siendo el lugar más inseguro para las mujeres. Por otro lado, la Organización Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres), afirma que un tercio de las mujeres del planeta son víctima de violencia física o sexual, es decir, 736 millones de mujeres han sufrido ese flagelo a manos de una pareja o por otras personas. Como se evidencia, en el mundo, la violencia contra la mujer es una alarmante realidad.

En consecuencia, esta problemática también afecta a nuestro país, Según la Defensoría del Pueblo, entre enero a junio del año 2021, se han reportado 2891 notas de alerta por desaparición de niñas, adolescentes y adultas mujeres y hasta el mes de junio del presente año, se advirtieron 17 casos de feminicidios: casi el doble de los ocurridos en mayo. Frente a ello, en los años anteriores se reportaron, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 619 feminicidios (2015-2019), es decir, tres feminicidios cada 10 días. Estas cifras nos han llevado a ser uno de los países con mayor número de casos de feminicidios en toda América Latina, según la información vertida por el observatorio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

V. OPINIONES RECIBIDAS

El Proyecto de Ley N° 502/2021-CR, ha recibido las siguientes opiniones:

5.1. PODER JUDICIAL

Mediante Oficio N° 003977-2021-SG-CS/PJ de fecha 26 de Noviembre del 2021, el señor WILLIAN CARLOS PEÑALOZA MATIAS, Secretario General de Corte Suprema de Justicia de la República, hace llegar el informe N°000195-2021-GA-P-PJ, remitido por la Jefa de Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, dando opinión al Proyecto de Ley 502/2021-CR, en los siguientes términos:

5.1.1 ANÁLISIS

5.1.1.1. Acerca de la sobre criminalización y la necesidad de una adecuada política criminal

a. En primer lugar, se debe señalar que, en el Perú, como consecuencia de la creciente inseguridad ciudadana, la criminalización primaria se ha manifestado en una tendencia a la sobre criminalización en la legislación penal. Una experiencia, en este sentido, Guía de Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) en la Sunass estuvo representada por la decisión del Congreso de la República de delegar facultades legislativas en el Poder Ejecutivo a través de la Ley N.° 26950, la misma que originó la expedición de once decretos legislativos que creaban delitos, aumentaban las penas y otros más de la misma índole, que, en general, debilitaban el debido proceso.[3]

b. Al respecto, no debemos olvidar que la criminología, la política criminal y la dogmática penal son autónomas en cuanto a campos científicos, los mismos que se encuentran más ligados a una unidad funcional en el complejo del procedimiento de realización del derecho penal. En este proceso decisivo, la criminología aporta el conocimiento empírico sobre el surgimiento de la criminalidad y la lucha contra ella. Asimismo, la política criminal busca transformar la experiencia criminológica en opiniones y estrategias concretas, asumibles por el legislador y los poderes públicos. Además, la dogmática penal presenta las posibilidades de configuración del derecho para fines políticos criminales. Una vez que la decisión ha obtenido vigencia jurídica por obra del legislador, la sistematización y la interpretación son tarea de la dogmática penal.[4]

c. De este modo, la política criminal se ocupa, en primer término, de efectuar el estudio crítico y prospectivo de las normas penales y de las institucionales que se encargan de la oportuna y eficaz aplicación preventiva y represiva. Para ello, promueve las reformas legislativas adecuadas a las nuevas situaciones sociales; es decir, examina si corresponde o no tales mecanismos a las exigencias de la sociedad y propone las reformas correspondientes. Así, surge un derecho penal dinámico, que va remozando de acuerdo con los avances de la ciencia. También, otorga a los poderes públicos las programaciones científicas concretas, que elabora en la lucha contra la delincuencia, más adecuadas para el eficaz control del delito.[5]

d. Así, podemos establecer que una respuesta a la criminalidad no parte necesariamente de una sobre criminalización de conductas o con el aumento de las penas, sino que esta ineludiblemente merece un estudio más detallado y fundamentado por parte de todos los actores que intervienen antes, durante y después de la elaboración de una norma específica.

5.1.1.2. Sobre la finalidad de la pena

---

[3] Villavicencio, F. (2019). Derecho Penal-Parte General. (p. 23). Grijley
[4] Óp. cit., p. 25.
[5] Óp. cit., p. 28.

a. Una explicación crítica de la pena parte de considerar a esta como un mal, y plantea la negación de su fundamento y la utilidad de la pena. Otras explicaciones parten de la misma premisa, pero admiten la posibilidad de comprobar cierta eficacia de la pena. Ello, dependiendo de si en la realidad, respecto del ejercicio del poder penal, es posible demostrar la eficacia de los fines preventivos de la pena (prevención general y especial); entonces, podrá ser posible aceptar o negar políticamente la legitimidad de la pena.[6]

b. El Código Penal de 1991 introdujo a la legislación penal peruana normas sobre la finalidad de la pena y un nuevo sistema de penas. En este sentido, el artículo I del título preliminar declara que "este código tiene por objeto la prevención de delitos y faltas como medio protector de la persona humana y de la sociedad", y el artículo IX del título preliminar expresa que "la pena tiene función preventiva, protectora y resocializadora". Por ello, podemos considerar que el Código se inscribe en la línea de una teoría unitaria aditiva de la pena y como función de esta.[7]

c. De modo tal que la pena tiene una mezcla de proporcionalidad (como respuesta inmediata frente al delito): prevención general (reinstaurando la norma vulnerada y demostrando su importancia frente a la sociedad) y prevención especial; en tal sentido, se considera dar mayor énfasis en esta última variante por la necesidad de rehabilitación del penado, a fin de reincorporarlos a la sociedad.

5.1.1.3. Límites de la pena

a. Ahora bien, se aprecia que los límites del poder penal actúan tanto en la creación de las normas penales (criminalización primaria) como en su aplicación (criminalización secundaria), pero se les suele clasificar en límites materiales o garantías penales y límites formales o garantías procesales, de persecución de ejecución. Así, dentro de los límites materiales o garantías penales debemos destacar para el presente caso lo siguiente:

- Principio de racionalidad y humanidad de las penas: en la actualidad se ha considerado como el pensamiento central de la ejecución penal y uno de los límites primordiales en un Estado democrático. Asimismo, **se rechazan aquellas sanciones penales que buscan mantenerse hasta la muerte de la persona.** Toda consecuencia jurídica debe terminar en algún tiempo, pero nunca debe rebasar más allá de la vida del penado ni ser perpetua, ya que implicaría admitir la existencia de una persona innecesaria.[8]
- Principio de respuesta no contingente: refiere a que la ley penal es una respuesta a conflictos sociales. El procedimiento para determinar los límites de la respuesta estatal **debe exigir un cuidado debate parlamentario, análisis a través de instituciones representativas y una adecuada discusión pública,** de forma tal que se ejercite una contención a la llamada administrativización del derecho penal, entendida como la proliferación incontrolada y no planificada de normas penales. La ley penal no puede ser una respuesta inmediata frente a todo tipo de

[6] Óp. cit., p. 69..
[7] Óp. cit., p. 72.
[8] Óp. cit., p. 107.

conflicto social; sin embargo, esta práctica es usual en la respuesta que el Estado peruano suele realizar ante el aumento de la criminalidad.[9]

b. Por ello, resulta importante generar correctos ámbitos de discusión, para que, sobre las bases de la investigación obtenida a través del análisis desde la óptica de la política criminal, se pueda establecer la pertinencia o no de la medida propuesta por el proyecto de ley analizado.

c. Igualmente, se debe tomar en cuenta lo señalado, a continuación, por los fundamentos jurídicos 15 y 16 de la Sentencia Plenaria Casatoria N.°01- 20018/CIJ-433, del 18 de diciembre de 2018:

> 15.° [...] La pena, pues, debe responder conjuntamente a la gravedad del injusto cometido (responsabilidad por el propio hecho) y a las necesidades sociales de pena que pueda existir al momento de su imposición y durante su ejecución; y, al confirmar los valores de convivencia que dan lugar a la norma de conducta infringida, expresa un reproche de contenido ético-social [...]. 16.° Entonces, metodológicamente, como se precisó, por ejemplo, en la STCE 136/1999, de veinte de julio, cabría examinar la proporcionalidad de una reacción penal desde tres perspectivas:
>
> 1. Desde su idoneidad, el tipo penal ha de procurar la preservación de bienes o intereses que no estén constitucionalmente proscritos ni sean socialmente irrelevantes, y cuando la pena sea instrumentalmente apta para dicha persecución.
> 2. Desde su necesidad, la pena ha de permitir alcanzar fines de protección – una pena será innecesaria, entonces, cuando a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador.
> 3. Desde su estricta proporcionalidad, la norma debe guardar equilibrio entre la entidad del delito y la entidad de la pena; no lo será, desde luego, cuando concurra un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad legislativa.

5.1.1.4. Sobre la cadena perpetua

a. La cadena perpetua se aplica tradicional e históricamente en los delitos más graves como son el terrorismo y la violación, entre otros. Con este tipo de penas, se le quita al individuo la esperanza de vida en la sociedad y queda relegado al ambiente de la prisión, pues, de esta forma, pierde cualquier deseo por resocializarse.[10]

---

[9] Óp. cit., p. 121.
[10] Bramont-Arias, L. (2008). Manual de Derecho Penal-Parte General. (4.a edición). EDDILI.

b. Así, el Tribunal Constitucional señaló que "en su regulación legal actual, es intemporal; es decir, no está sujeta a límites en el tiempo, pues si tiene un comienzo, sin embargo carece de un final y, en esa medida, niega la posibilidad de que el penado en algún momento pueda reincorporarse a la sociedad; por lo tanto concluye que el establecimiento de la pena de cadena perpetua solo es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otros que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal" (sentencia del 3 de enero de 2003, Expediente N.°010-2002-AI-TC).

c. Cabe recordar que, en conformidad con el fundamento de la exposición de motivos del Proyecto de Ley N.°2402-2017-CR, que sirvió para modificar el artículo 173 del Código Penal e imponer cadena perpetua para la violación de menores de edad, se indicó lo siguiente: "En ese sentido, realizando una ponderación de derechos podemos establecer que el derecho a la intangibilidad sexual e indemnidad sexual de un menor de edad, se encuentra por encima del derecho a la libertad del agente activo sin importar su condición social, cultural, económica, etc.".

d. Igualmente, sobre la cadena perpetua como sanción del delito de violación de mayor de edad, pero causando su muerte, se indicó que, no obstante, esta sobre criminalización o "terror del Estado" con el incremento exagerado de las penas, solo en apariencia, se aprecia como una mayor protección a la víctima, pues, en la práctica, no parece haber contribuido a una mayor eficacia preventivo-general o a la mayor tutela de los bienes jurídicos del derecho penal sexual. En los estrados judiciales, son frecuentes los casos de delitos sexuales. Por el contrario, esta regulación simbólica sirve más como una simple salida facilista del Estado frente a la demanda social.[11]

e. Por lo tanto, se aprecia que, aunque la cadena perpetua se justifica desde la perspectiva del reproche de conductas altamente graves o lesivas de los bienes jurídicos de inmenso peso ante la sociedad, en la realidad, esta sanción no garantiza una palpable prevención de parte de otros sujetos tentados a cometerlas y, por el contrario, no cumple con la verdadera demanda de tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas.

5.1.1.5. Sobre el delito de feminicidio

a. Con la dación del Código Penal en abril de 1991, se tipificó el homicidio simple (artículo 106 con una pena no menor de seis ni mayor de veinte años) y el homicidio calificado (artículo 108 con una sanción no menor de quince años – sin máximo especifico, pudiendo ser este 35 años conforme con el artículo 29–) para las conductas que atenten contra la vida tanto de hombres como de mujeres, diferenciándose solo por el tipo de circunstancias agravantes que caractericen el hecho.

[11] Caro, D. (2003). Aspectos jurisprudenciales de la tutela penal de la libertad e indemnidad sexuales, en Libro homenaje a Luis Bramnot Arias. Editorial San Marcos

b. No obstante, con la determinación del delito de parricidio (artículo 107 con una pena no menor de quince años –es decir, similar al homicidio calificado) se sancionó con especial diferenciación al homicidio (entre otros) de los cónyuges o concubinos, independientemente de si se tratara de hombre o mujer.

c. No fue sino hasta el 27 de diciembre de 2011 que se expidió la Ley N.°29819 que modificó el previo artículo 107 para denominarlo "Parricidio/Feminicidio", reiterando la sanción contra el homicidio de cónyuge, pero modificando el término de concubino para ahora denominarlo conviviente; y, agregar también a "las relaciones análogas" (presentes o pasadas); además, que se estableció que si la víctima de estos hechos resultaba ser mujer, "tendrá el nombre de feminicidio" (adicionalmente se incorporó un párrafo agravante que sancionaba con una pena no menor de veinticinco años cuando el hecho se comete con cualquier agravante del artículo 108).

d. Posteriormente, el 18 de julio de 2013 se promulgó la Ley N.°30068 que realizó una modificación sustancial al Código Penal, pues por un lado eliminó el último párrafo del artículo 107 (que hacía referencia a la denominación de feminicidio cuando la víctima fuera mujer) y en su reemplazo incorporó el artículo 108-B con el nomen iuris de "feminicidio" que ya no solo sancionaba el homicidio de mujeres dentro de cualquier relación sentimental sino a cualquiera que se produzca contra estas víctimas por su "condición de tal".

e. Fue así que se establecieron tres rangos punitivos determinados por circunstancias agravantes específicas, siendo el primero con una pena no menor de quince años; el segundo con una pena no menor de veinticinco años; y **el tercero con cadena perpetua**. Este sistema de tercios fue reiterado con la subsecuente modificación legislativa del 13 de julio de 2018 mediante Ley N.° 30819, aunque elevando las penas mínimas para el primer párrafo de 15 a 20 años; y en el segundo de 25 a 30 años; manteniéndose la pena de cadena perpetua para el tercer párrafo (cuando el feminicidio ocurra con dos o más de las circunstancias específicas de los dos primeros párrafos y agravantes del artículo 108).

f. Esto se mantiene hasta la actualidad, por lo que se concluye que **nuestra legislación sí contempla la pena de cadena perpetua para el delito de feminicidio** del artículo 108-B del Código Penal, pero solo y únicamente para el tercer párrafo del mismo referido a su comisión con cualquiera de las agravantes de los dos primeros párrafos o con las del artículo 108.

5.1.1.6. De los fundamentos de la propuesta legislativa

a. Ahora bien, conforme se puede apreciar de la exposición de motivos de los proyectos de ley que sustentaron tanto a la Ley N.°29819[12] como a la Ley N.°30068[13], estás se basan en el alto incremento de la tasa de homicidios contra

[12]https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/B8A7D82F30BFAF7305256F260056634D/473140 A5A0AB3E73052578E2007B7A8A?OpenDocument
[13]https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Expvirt_2011.nsf/B8A7D82F30BFAF7305256F260056634D/7BA3C D3A3A6AB9560525791F005AC468?OpenDocument

mujeres que desde buena cantidad de años atrás han generado una crisis que justificó su calificación como población vulnerable. Al respecto:

- La violencia contra las mujeres en nuestro país constituye una problemática social muy grave que se desarrolla en todos los ámbitos, se presenta de diversas formas y se manifiesta tanto en el espacio público como privado.
- La especial incidencia que se aprecia en la casuística sobre delitos de violencia de género contra mujeres en la región Latinoamericana, generó la necesidad de la adopción y recomendaciones de medidas especiales no solo para frenar el flagelo que aquejaba a esta población específica, sino que con ello también se buscó reestablecer o equiparar la balanza desigual que por años se inclinaba en contra de las víctimas por cuestiones de evidente discriminación basado en su género.
- Así, tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló distintos objetivos que resultan relevantes para la finalidad antes expuesta, tales como la urgencia de establecer un acceso jurídico y de hecho a las garantías y protecciones judiciales que no solo se limite a la existencia de los recursos judiciales formales sino de asegurarse que estos sean idóneos para investigar, sancionar, y reparar a las violaciones denunciadas a través de la implementación de autoridades especializadas y sensibilizadas.
- Del mismo modo, a través del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, se dejó igual constancia en la recomendación del treinta de octubre de 2017, sobre la preocupación por la dilación en los procesos judiciales que perjudican a las mujeres víctimas de violencia de género y recomienda al Estado peruano que haga lo necesario para que el sistema de justicia asegure de forma oportuna y eficaz el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género, garantizando la debida diligencia de acuerdo a los plazos legales, que para todas las etapas del proceso, establece el nuevo modelo procesal penal.
- Asimismo, el Marco Modelo de Legislación sobre violencia contra la mujer, formulado por las Naciones Unidas, establece como recomendaciones, entre otras, que la legislación se encargue de la creación de instituciones (tribunales especializados o procedimientos judiciales especiales) y funcionarios especializados para aplicar legislación en materia de violencia contra la mujer

b. Es precisamente a raíz de estas recomendaciones que se fundamentó la creación final de un artículo específico e independiente de "feminicidio", diferenciado y con marcos punitivos especiales con respecto a otras formas delictivas similares y, adicionalmente, que se investiguen y sancionen en procedimientos a cargo de órganos especializados[14].

c. Dicho lo anterior y retomando el principio de proporcionalidad señalado inicialmente, cabría realizar un análisis sobre la pertinencia de la medida

[14] Esto justificó la dación original de la Ley N° 30364 – Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y también el Decreto Legislativo N° 1368 del veintisiete de julio de 2018, el cual creó el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la atención de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

propuesta que plantea establecer una única pena de cadena perpetua para cualquier acción llevada a cabo que se configure dentro del artículo 108-B del Código Penal:

- La diferenciación del marco punitivo surge precisamente en respuesta proporcional al principio de lesividad, pues mientras más lesiva es una conducta se justificará una mayor sanción.
- Considerar cualquier acción homicida dentro del feminicidio como sancionable con cadena perpetua no solo rompe el principio de proporcionalidad y lesividad antes señalado sino que más bien (y de repente inadvertida por la propuesta legislativa) no conduce como se creería al desincentivo del ilícito, pues en realidad generaría todo lo contrario, ya que al no existir graduación basada en la intensidad de la conducta, igual será cometer el hecho sin ninguna agravante o con todas las que puedan existir, lo que en la práctica más bien motivaría a que se fomente la comisión de conductas más agravadas al resultar igualmente sancionables que las formas simples.
- Lo anteriormente señalado no solo resulta una conjetura u opinión sin sustento, pues debe recordarse que para el delito de violación sexual de menor de edad (artículo 173) también se sanciona en la actualidad (por Ley N.° 30838 del 04 de agosto de 2018) con cadena perpetua para todos sus supuestos, siendo esta sanción igual que la del delito de violación sexual de menor seguida de muerte (artículo 173-A), por lo que al tener ambas conductas la misma pena se generó un incremento de homicidios de menores de edad tras haber sido violados; no solo con la finalidad de ocultar los hechos cometidos sino debido a que la pena resultaría igual si se dejara con vida a la víctima.

d. Finalmente, de la exposición de motivos, tampoco se aprecia un análisis estadístico, normativo o jurisprudencial que sustente cómo la sanción de cadena perpetua fomenta la des incentivación criminal y reducción de la criminalidad; cuando más bien la estadística de estas sanciones no ha demostrado ello sino, más bien, el mantenimiento de su estatus quo o, peor aún, su incremento.

5.1.1.7. Conclusiones

Por lo tanto, en mérito de las consideraciones y argumentos precedentes, la propuesta legislativa contenida en el Proyecto de Ley N.°502/2021-CR **NO RESULTA VIABLE.**

5.2. DEFENSORIA DEL PUEBLO

Mediante el oficio N° 380-2021-DP/PAD, de fecha 28 de diciembre del 2021, la señora Eugenia Fernán Zegarra, Primera Adjunta (e) de la Defensoría del Pueblo, que remite el Informe de la adjuntía N° 030-2021-DP/ADM de la Adjuntía, que opina en los siguientes términos:

5.2.1. Análisis de la propuesta legislativa

5.2.1.1. El deber de protección de la mujer por parte del Estado Peruano y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El Estado peruano en virtud a la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Para" se encuentra obligado a garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia (artículo 3) tanto en el ámbito privado como público y ante cualquier manifestación de la misma. Asimismo, tiene el deber de incluir dentro de la legislación normas cuya naturaleza respondan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (artículo 7).

Al respecto, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha señalado que una de las proposiciones que forman parte del contenido inderogable del derecho a una vida libre de violencia es que no sean objeto de acción o conducta que le cause muerte, sufrimiento físico, sexual o psicológico, por su condición de mujeres.[15] Es así que en el caso del tipo penal de feminicidio se ha recurrido a diversas fórmulas legales destinadas a fortalecer la confianza en el sistema penal[16], se reforzar la respuesta punitiva del Estado y se disipe la imagen de impunidad ante la comisión de estos delito.

5.2.1.2. El delito de feminicidio y los bienes jurídicos que protege

Desde la tipificación del feminicidio en el Perú mediante la Ley N°29819, el 27 de diciembre de 2011, su redacción inicial sufrido múltiples modificaciones en cuanto a agravantes y también respecto al quantum de la pena. Por ello, resulta importante relevar que el feminicidio es un delito pluriofensivo; es decir, que no solo tiene como objeto proteger la vida de la mujer sino al mismo tiempo la igualdad.[17]Es así, que no sanciona la sola producción misma de la muerte de una mujer, sino aquella que se produce en el marco de una situación de discriminación estructural contra ellas.[18]

Así, este delito comunica al delincuente que ha cometido un daño severo contra la vida de la víctima y que los estereotipos de género no tienen validez en una sociedad democrática e igualitaria; asimismo, a las mujeres les confirma la validez de su derecho a una vida libre de violencia. De esta manera, el reproche del tipo penal autónomo es relevante porque se dirige al delincuente como ser responsable capaz de tomar consciencia del daño causado; a la víctima, a quien se le reconoce el sufrimiento padecido y se le comunica la vigencia de sus derechos; y a la sociedad, a

---

[15] Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el expediente N°03378-2019-PA/TC, fundamento jurídico 36

[16] Claus Roxin describe este fin como el "'ejercicio de la confianza en el derecho' que se produce en la población por medio de la actividad de la justicia penal; el efecto de confianza que resulta cuando el ciudadano ve que el derecho se impone; y finalmente, el efecto de satisfacción que se instala cuando la conciencia jurídica se tranquiliza como consecuencia de la sanción por sobre el quebrantamiento del derecho, y cuando el conflicto con el autor es visto como solucionado."

[17] Alonso, Mercedes (2008). Protección penal de la igualdad y derecho penal de género. Cuadernos de Política Criminal, páginas 19-52.

[18] Díaz Ingrid, Rodríguez Julio y Valega Cristina (2019). Feminicidio: Interpretación de un delito de violencia basada en género. Lima: PUCP, página 54.

quien se le confirma la dañosidad del acto delictivo y se la disuade, apelando al sentimiento de la gente sobre el carácter lesivo de la conducta castigada.[19]

Asimismo, debe recordarse que el fin característico y principal de toda herramienta jurídico penal es su capacidad para renovar la confianza de la ciudadanía en el orden constitucional a través de la imposición de una sanción que comunica la vigencia de los derechos fundamentales de la víctima y que permite al delincuente tomar conciencia de la seriedad de su conducta dañina.[20]

En ese sentido, en aras de sancionar de forma efectiva los actos que vulneren el derecho a la vida e igualdad de las mujeres se justificaría un aumento de penas en la figura penal de feminicidio y feminicidio agravado. Ello responde a una necesidad que los jueces y juezas dispongan de un rango más amplio de años para sancionar este tipo de hechos atendiendo la gravedad de cada uno de los casos. No obstante, ello no implica una forma de incidir en prevención de este delito ni una variación de la discriminación estructural que afecta a las mujeres.

5.2.1.3. La tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal

El delito de feminicidio se encuentra tipificado en artículo 108-B del Código Penal, en su forma simple en el primer párrafo; y a continuación, en su forma agravada en el segundo parágrafo del mismo apartado, al establecerse las circunstancias agravantes que lo revisten de mayor lesividad y por ende de mayor reproche.

Efectuado el análisis de la modificación que se plantea respecto del artículo 108-B del Código Penal a fin de establecer la pena de cadena perpetua como única alternativa de sanción para los delitos de feminicidio, implicaría la exclusión del delito de feminicidio agravado de nuestro ordenamiento penal, pues de esta manera se estaría acumulando en una sola forma delictiva la figura del feminicidio simple y feminicidio agravado, quedando así equiparadas ambas conductas delictivas y suprimidas las circunstancias agravantes.

Al respecto, debemos precisar que, las agravantes son circunstancias que incrementan la responsabilidad penal de un sujeto activo, es decir que son los motivos que se vinculan al hecho en sí mismo y otorgan más gravosidad al delito.

Las agravantes pueden ser de dos tipos: agravantes objetivas, relacionadas a los medios utilizados para cometer el crimen y a la ejecución concreta de la acción delictiva; y agravantes personales, asociadas a la relación del delincuente con la víctima o a la condición moral. Nuestro Código Penal recoge ambas formas para el delito de feminicidio agravado.

En este sentido, cabe señalar que el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal establece el principio de proporcionalidad de las sanciones, que permite establecer el enlace material entre el delito y su consecuencia jurídica. Acorde con ello, Aguado

[19] Von Hirsch, Andrew. (1998). Censurar y castigar. Madrid: Trotta, páginas 6-40.
[20] Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente N° 0019-2005-AI/TC, fundamento jurídico 40

Correa señala que "si bien el legislador a la hora de determinar la pena que le corresponde a un delito ha de partir de criterios de proporcionalidad entre el injusto y la pena, siendo fundamental la gravedad intrínseca del hecho, su decisión debe incorporar además criterios de prevención, tanto general como especial"[21]

Conforme con este criterio, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que el principio de proporcionalidad de las penas está relacionado con la "prohibición de exceso" dirigido al legislativo y que "es un valor constitucional implícitamente derivado del principio de legalidad penal, así reconocido en el artículo 2°, inciso 24, literal d) de la Constitución, en interpretación conjunta con el último párrafo del artículo 200° constitucional, en el que se reconoce explícitamente el principio de proporcionalidad"[22]

En este sentido, asemejar a quienes se ajusten a estas formas de agravantes personales o que incurran en algún tipo objetivo con aquellos que no encajen ninguna de dichas condiciones o no incidan en las mencionadas conductas, implicaría establecer la misma sanción para distintas actuaciones. Esta equivalencia desconoce el principio de proporcionalidad antes mencionado, así como podría alentar el despliegue de acciones más cruentas en la comisión del delito, máxime si tenemos en cuenta que el feminicidio es una manifestación de desprecio por la vida de las mujeres.

5.2.1.4. La necesidad y utilidad del incremento de las penas para delitos de feminicidio

Durante los últimos años, las cifras de feminicidio se han incrementado y en la actualidad continúan en ascenso; es por ello que se requieren medidas y políticas efectivas que contribuyan a combatir esta forma extrema de violencia contra las mujeres.

En ese contexto, se han emitido diversos dispositivos legales que van desde el endurecimiento de penas hasta la eliminación de beneficios penales y penitenciarios; sin embargo, estos no han permitido alcanzar las expectativas planteadas. La falta de capacitación en enfoque de género es uno de los factores que impulsa la contravención e inaplicación de esta normativa diferenciada, de ahí que la dificultad no radica en la legislación, sino en su utilidad.

El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen un papel muy importante no sólo en la sanción de la violencia contra las mujeres; sino también en la prevención de esta, a través de la consecución y emisión de fallos ejemplares que permitan eliminar toda percepción de impunidad en nuestra sociedad y, por el contrario, transmitir seguridad y confianza a la población en el sistema de justicia.

Por ello, advirtiéndose que el problema no radica en la normativa sino en la aplicación de la misma, no resulta suficiente establecer sanciones más drásticas, sino que esta

---

[21] Aguado Correa, Teresa (2012). El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano; en: Urquizo Olaechea, José y Salazar Sánchez, Nelson (coordinadores). Derecho Constitucional Penal. Lima: IDEMSA, 2012, página 34

[22] Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el Exp. EXP. n.°01010-2012-PHC/TC, fundamentos jurídicos 4 y 5.

determinación necesariamente debe estar también integrada con una adecuada técnica judicial.

5.2.1.5. Conclusión

Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo considera que los fines perseguidos por el Proyecto de Ley n°502/2021-CR son legítimos. No obstante, se debe tener en consideración que la modificación propuesta del artículo 108-B del Código Penal puede constituir un riesgo para la sanción adecuada de delitos de feminicidio, acorde con los principios establecidos por el Código Penal y el marco constitucional, al consolidar en un solo tipo penal los delitos de feminicidio y feminicidio agravado, limitando totalmente el rango de pena a imponer.

Por ello, recomendamos evaluar los alcances normativos de la propuesta legislativa analizada, a fin mantener la coherencia con el marco jurídico nacional.

5.3. MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Oficio N° 000821-2022-MP-FN-SEGFIN, de fecha 28 de Febrero del 2022, la señora Ana María Velarde Roa, Secretaria General de la Fiscalía de la Nación, que remite el informe Nº 58 – 2021- MP-FN-FEVCMYGF, elaborado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el cual contiene la opinión Institucional al Proyecto de Ley N· 502-2021-CR, en los siguientes términos:

5.3.1. ANÁLISIS

5.3.1.1. Propuesta legislativa

La propuesta legislativa tiene por objeto de modificar el artículo108 -B del Código Penal — Decreto Legislativo N°635.

En ese sentido, se propone que el texto incorporado sea el siguiente:

TEXTO ACTUAL	*TEXTO PROPUESTO*
Artículo 108-B del Código Penal Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:	**Artículo 108-B del Código Penal** Será reprimido con pena privativa de libertad con **cadena perpetua** el que mata a una mujer por su

1. Violencia familiar. 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente. 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 5. La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 6. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 7. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 8. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 9. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación. 10. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. 11. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana. 12. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108.	condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: 1. Violencia familiar. 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3. Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente. 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. 5. La pena privativa de libertad será no menor de treinta años cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 6. Si la víctima era menor de edad o adulta mayor. 7. Si la víctima se encontraba en estado de gestación. 8. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 9. Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación.

13. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente. 14. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda.	10. Si al momento de cometerse el delito, la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad. 11. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana. 12. Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108. 13. Si, en el momento de cometerse el delito, estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente. 14. Si el agente actúa en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. En todas las circunstancias previstas en el presente artículo, se impondrá la pena de inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda.

5.3.1.2. La propuesta legislativa es viable

porque concuerda con la Constitución Política del Perú, lo mencionado en el Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar de la Ley 30364, y las estipulaciones de la

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra mujer - Convención de Belém Do Pará, y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer — CEDAW.

5.3.1.3. Justificación y/o motivación:

El Tribunal Constitucional, define que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho humano tras su reconocimiento por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", cuyo artículo 3 reconoce que "...toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado...". Asimismo, en el plano infraconstitucional, el artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley 30364 desarrolla legislativamente aquel derecho: "Las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación"; describiendo en su fundamento jurídico 70 al feminicidio como la acción dematar a una mujer por desarrollar un comportamiento que incumple con el estereotipo de género que se esperaba de ella '...el feminicidio como hecho último es el mensaje de poder, dominio y posesión que emplean los hombres para dejarle en claro a las mujeres cuáles son los límites que no pueden sobrepasar, porque de hacerlo se convienen en potenciales víctimas de violencia...".[23]

Dentro del Ordenamiento Jurídico Peruano, el Código Penal contempla a la cadena perpetua en su artículo 29, estableciendo que "La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso, tendrá una duración mínima de dos días y una máxima de treinta y cinco años".

Asimismo, el inciso 22) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú constituye un límite al legislador, que incide en su libertad para configurar el cuántum de la pena. En efecto, cualquiera sea la regulación de ese cuántum o las condiciones en la que ésta se ha de cumplir, ella debe necesariamente configurarse en armonía con las exigencias de "reeducación", "rehabilitación" y "reincorporación" del penado a la sociedad.[24]

Para la Organización de las Naciones Unidas deben ser considerados como feminicidios las muertes violentas de mujeres que denotan una motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género. Con el feminicidio se pretende refundar y perpetuar los patrones que culturalmente han sido asignados a lo que significa ser mujer: subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad. El delito de feminicidio, por tanto, refuerza el proceso de discriminación estructural de las mujeres.[25]

---

[23] Sentencia N°3378-2019-AA/TC
[24] Exp. N.°010-2002-AI/TC. Fundamento jurídico N°183.
[25] Organización de las Naciones Unidas (2012] Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio]. Ciudad de Panamá: OACNUDH. Pág. 35

Dentro de ese contexto, el TUO de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como reparación del daño causado; y dispone la persecución, sanción y reeducación de los agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupofamiliar una vida libre de violencia asegurando el ejercicio pleno de sus derechos.

A su vez, el Tribunal Constitucional ha señalado que la cadena perpetua es inconstitucional, si el Estado no prevé mecanismos para controlar o medir el cumplimiento de los fines de pena, esto es, reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad; la revisión de la cadena perpetua cada cierto periodo de tiempo y la aplicación de beneficios penitenciarios a los condenados a cadena perpetua.[26]

En nuestro caso, la cadena perpetua se encuentra regulada, a través del Decreto Legislativo N°921, Decreto Legislativo que establece el Régimen Jurídico de la Cadena Perpetua en la Legislación Nacional y el Límite Máximo de la Pena para los delitos previstos en los artículos2°, 3° inciso b) y c), articulo 4, 5, y 9 del Decreto Ley N°25475, establece no solo el procedimiento de revisión de la cadena perpetua, sino también señala que esta es revisable luego de 35 años. Asimismo, se tiene el Decreto Legislativo N°982 de fecha 22 de julio de 2007, que modificó el artículo 29° del Código Penal dejándolo con su actual redacción.[27]

Por lo antes expuesto, somos conscientes que para combatir el feminicidio existente en nuestro país se debe adoptar distintas medidas legislativas, así como diseñar políticas públicas orientadas básicamente a su prevención, a su investigación seguida de la imposición de una sanción, y a la reparación de las víctimas, pues sería el medio más idóneo para contrarrestar y erradicar las cifras exorbitantes de homicidios de mujeres en manos del varón.

5.3.1.4. CONCLUSIÓN

El feminicidio en sí mismo también constituye un acto discriminatorio hacia la mujer víctima, si tal como define el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a la discriminación contra las mujeres, esta incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada; la misma que le impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre.[28]

5.4. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

---

[26] Expediente N°803-2003-HC/TC, numeral 20.
[27] Expediente N°803-2003-HC/TC, numeral 22.
[28] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación General 19: La violencia contra la mujer, aprobada en el 11" periodo de sesiones (1992], párrafos 1 y 6. Este criterio ha sido acogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Pág. 395.

Mediante Oficio N° 1796-2022-JUS-SG, de fecha 13 de Julio del 2022, el señor Ramón Fernando Alcalde Poma, Secretario General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que remite copia del Informe Técnico Nº 000074–2022- JUS-DGAC, elaborado por la Dirección Nacional de Asuntos Criminológicos del Sector, el cual da respuesta al pedido opinión jurídica sobre el Proyecto de Ley N· 502-2021-CR, en los siguientes términos:

5.4.1. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY:

El presente proyecto de ley busca endurecer el tratamiento penal del delito de feminicidio, partiendo de una realidad innegable de incidencia delictiva en el periodo 2015-2019. Conforme se advierte de las cifras expuestas en su exposición de motivos durante este periodo se han presentado una cantidad significativa de casos victimización:

Al respecto, es necesario tomar en cuenta que la política criminal frente al delito de feminicidio se ha caracterizado por un permanente incremento de los marcos punitivos del tipo penal desde su tipificación autónoma, sumado al incremento de penas diferentes a la privativa de libertad y al endurecimiento de reglas penitenciarias para sus perpetradores.

Tabla N°01

Año	Víctimas de feminicidio
2015	84
2016	106
2017	131
2018	150
2019	148

Cuadro: Elaboración propia
Fuente: Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) del INEI

La tipificación autónoma ya supone optar una postura punitiva específica de particular frontalidad frente a un fenómeno criminalizado. En el caso del delito de feminicidio, dicha formulación se realizó en julio de 2013 en el artículo 108-B del Código Penal (Ley N° 30068), conteniendo marcos punitivos especialmente elevados. El tipo base, que hace referencia a cuatro contextos de violencia, fue sancionado con una pena privativa de libertad no menor de quince (15) años, una pena equivalente al delito de homicidio calificado. Asimismo, sus siete supuestos agravantes tiene previsto una pena no menor de veinticinco (25) años de privación de libertad. Se adhieren a estos supuestos, la asignación de cadena perpetua a aquellos casos en los que concurren dos o más de las agravantes mencionadas. También se adhiere una modificación al código de ejecución penal en el que se le reconoce un régimen restrictivo de redención de la pena por estudio o trabajo de seis días de labor por un día redimido.

En agosto de 2013, a través de la Ley N° 30076, se modificó el artículo 48 del Código de Ejecución Penal para precisar que el beneficio penitenciario de semilibertad no será aplicable, entre otros delitos, al delito de feminicidio[29]. Con ello, se buscó un mensaje normativo mucho más severo y disuasivo respecto a este delito.

En mayo de 2015, a través de la Ley N° 30323, se agregó un párrafo a la fórmula legal del delito de feminicidio, incorporando una pena de inhabilitación además de la pena privativa de libertad, aplicable en los que casos en que el autor tenga hijos o hijas con la víctima. Se trata del supuesto de inhabilitación referido a "Incapacidad para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela", regulado en el inciso 5 del artículo 36 del código penal. Cabe señalar que, antes de tal incorporación, dicha pena de inhabilitación ya era aplicable por el juez penal como pena accesoria conforme al artículo 39 del Código Penal.

En diciembre de 2016, a través del Decreto Legislativo N° 1296, se modificó el artículo 53 del Código de Ejecución Penal para precisar que no resultará procedente la aplicación del beneficio de liberación condicional, entre otros delitos, al delito de feminicidio[30] . Una vez más, se buscó un mensaje ejemplificador para potenciales perpetradores de este delito.

En enero de 2017, a través del Decreto Legislativo N° 1323, se incorporó un nuevo supuesto agravado al tipo penal del delito de femicidio. Con ello, los feminicidios cometidos a sabiendas de la presencia de las hijas o hijos de la víctima o de niños, niñas o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado, serían sancionados con una pena no menor de veinticinco (25) años de privación de libertad.

En julio de 2018, a través de la Ley N° 30819, se modificó una vez más el artículo 108-B que regula el delito de feminicidio. Esta vez para aumentar la pena del delito base, el mismo que pasaba de ser sancionado con un mínimo legal de quince (15) años a serlo con uno de veinte (20) años de privación de libertad. En el mismo sentido, se aumentó el marco punitivo de las agravantes, de presentar un mínimo legal de veinticinco (25) años pasaron a uno de treinta (30) de privación de libertad. A ello suma la incorporación de un nuevo supuesto agravado referido a la comisión de un feminicidio en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas.

A pesar de la tipificación autónoma y el aumento permanente de penas, agravantes, restricciones y prohibiciones penitenciarias, no se advierte una reducción clara de la incidencia del delito de feminicidio. Del diagnóstico político-penal se desprende que el

[29] Cabe señalar que actualmente los supuestos de inaplicabilidad de la semilibertad están regulados en el artículo 55 del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal

[30] Cabe señalar que actualmente los supuestos de inaplicabilidad de la liberación condicional están regulados en el artículo 55 del Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal.

inconveniente en la estrategia de abordaje de violencia feminicida no se encuentra en la carencia o en la insuficiencia de un marco punitivo, sino en la operativización de mecanismos, medidas, funciones y procedimientos fácticos de intervención individual y colectiva para asegurar la prevención, la sanción y neutralización de estas conductas. En ese sentido, se destacan diversos documentos, regulaciones especiales, políticas e instrumentos de organización y orientación por parte del Estado (Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021; Política Nacional frente a la Trata de Personas, entre otras), aunque también es necesario reconocer la urgencia de fortalecer las capacidades de implementación, ejecución y evaluación oportunas de los mismos para asegurar mayor impacto social, más aún cuando se trata de neutralizar fenómenos sociales de grave daño como la violencia feminicida.

En cuanto al sistema penal como componente específico, el mismo requiere mejor funcionamiento antes que ampliaciones sancionatorias, pues estas ya han sido permanentemente aumentadas. En lo referido a casos de violencia de género, representada por antonomasia por el delito de feminicidio, es necesario mejorar los canales de acceso a la justicia para las víctimas y la operativización de las normas ya existentes, pues las propuestas punitivas, no han incidido en la disminución del fenómeno.

Asimismo, se observa que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley no se desarrolla el principio de proporcionalidad penal. Como ha señalado el Tribunal Constitucional, se trata de un principio general del derecho que se encuentra positivizado en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución y que, por lo tanto, es de aplicación en cualquier ámbito de intervención del Estado relacionado a las libertades de los ciudadanos[31]. Sobre la base de este principio se debe analizar si la medida de intervención estatal que se propone resulta idónea, necesaria y proporcional para conseguir un fin constitucional.[32]

En el marco del derecho penal, este análisis cobra especial importancia puesto que la pena representa la intervención más gravosa del Estado en la esfera de libertades de los ciudadanos. Por lo tanto, se exige, en un primer lugar, que el legislador, al momento de fijar los marcos de pena abstracta con los que sanciona las conductas ilícitas, procure que estos respondan a la protección de un bien jurídico protegido, al grado de afectación de este y a la ausencia de mecanismos igualmente idóneos para cumplir con esta finalidad. En esa línea, el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal consagra la proporcionalidad de las sanciones, estableciendo que la pena a imponerse no debe exceder la valoración del comportamiento realizado, previendo de esta manera una prohibición de exceso a la sanción resultado de la persecución penal.

Por otro lado, no debe perderse de vista que, de acuerdo con el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución, la pena debe estar orientada a la reeducación, rehabilitación y

[31] Sentencia recaída en el Expediente N° 00010-2002-AI/TC, fj. 195.
[32] Sentencia recaída en el Expediente N° 00012-2006-AI/TC, fj. 36

reinserción del condenado en la sociedad. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que con este artículo se proclama la función de prevención especial positiva de la pena, la misma que se erige como guía de actuación del legislador al momento de fijar el quantum de la pena[33]. Sin embargo, el Proyecto de Ley se fundamenta en un fin disuasorio de la pena, ya que asume que con el aumento de los marcos punitivos se reducirían los índices de comisión de los delitos que se pretende modificar, sin embargo, debe tenerse en cuenta que no existe evidencia que permita afirmar que el aumento de penas permita prevenir el delito o reducir las altas tasas de criminalidad.

Aunado a ello, en la regulación del delito de feminicidio que se propone, los tres niveles punitivos que se prevén actualmente – y que representan tres grados de afectación al bien jurídico protegido – se reducen a un único desvalor, lo que a todas luces vulnera el principio de proporcionalidad. Con ello, sería innecesario consignar las agravantes actuales del delito de feminicidio en la fórmula legal que se propone – puesto que toda muerte de una mujer por su condición de tal, en contextos de violencia familiar; coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; y en contextos de discriminación, serían desvalorados de igual manera.

Finalmente, como bien señala la exposición de motivos, durante el último periodo parlamentario complementario (2020-2021), se desarrollaron diversas iniciativas normativas respecto al endurecimiento del marco punitivo del delito de feminicidio, entre ellos, el proyecto de ley N° 7044/2020-CR[34] y el proyecto de ley N° 05940/2020- CR[35] , los mismos que fueron pasibles de atención por esta Dirección General mediante el Informe Técnico N° 010-2021-JUS/DGAC y Nº 012-2021-JUS/DGAC, respectivamente, a través del cual se manifestó su inviabilidad, toda vez que la imposición de la cadena perpetua u otra medida de agravamiento de las penas no ha demostrado ser una medida idónea para disuadir la comisión del delito.

5.4.2. CONCLUSIÓN:

El presente proyecto de ley propone modificar el marco punitivo del delito de feminicidio regulado en el artículo 108-B del Código Penal, estableciendo la pena privativa de libertad de cadena perpetua para todas las modalidades del referido delito. Al respecto, cabe precisar que la modificación punitiva responde a una política penal que hasta el momento no ha tenido resultados positivos en la reducción de la incidencia del feminicidio y que vulnera el principio de proporcionalidad.

---

[33] Sentencia recaída en el Expediente N° 00010-2002-AI/TC, fj. 179.
[34] "Proyecto de ley que incorpora la condición de desaparecida de la víctima como agravante en los delitos de feminicidio, y propone la aplicación de la cadena perpetua para todos los delitos de feminicidio gravado, así como plantea la incoación del proceso inmediato por feminicidio en flagrancia y en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en flagrancia"
[35] "Ley que modifica el artículo 108-B del Código Penal referido a la aplicación de cadena perpetua por el delito de feminicidio"

En conclusión, esta Dirección General considera que el Proyecto de Ley N° 502/2021-CR **resulta NO VIABLE.**

VI. – ANALISIS COSTO BENEFICIO

No es aplicable a la presente iniciativa el análisis costo beneficio, por cuanto del análisis efectuado resulta **no viable**.

VII. - CONCLUSIONES

Como se puede apreciar en las opiniones vertidas por el Poder Judicial en el punto 5.1 del presente dictamen que dice: el Tribunal Constitucional señaló que "en su regulación legal actual, es intemporal; es decir, no está sujeta a límites en el tiempo, pues si tiene un comienzo, sin embargo carece de un final y, en esa medida, niega la posibilidad de que el penado en algún momento pueda reincorporarse a la sociedad; por lo tanto concluye que el establecimiento de la pena de cadena perpetua solo es inconstitucional si no se prevén mecanismos temporales de excarcelación, vía los beneficios penitenciarios u otros que tengan por objeto evitar que se trate de una pena intemporal" (sentencia del 3 de enero de 2003, Expediente N.°010-2002-AI-TC) y las opiniones vertidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consignadas en el punto 5.4 del presente dictamen, después de un análisis Técnico – Jurídico, concluyen que el Proyecto de Ley Nº 502-2021-CR, NO ES VIABLE.

VIII. - RECOMENDACIÓN

Por las conclusiones expuestas , la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con el literal c) del Artículo 70 del Reglamento Interno del Congreso de la República, recomienda la **NO APROBACIÓN** del Proyecto de Ley Nº 502-2021-CR y su remisión al archivo.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BALCAZAR ZELADA Jose Maria FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/12/2022 14:55:33-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GONZA CASTILLO Américo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2022 17:52:25-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES GONZALES Alex Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2022 18:27:46-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JUAREZ GALLEGOS Carmen Patricia FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 09:59:35-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: GUERRA GARCIA CAMPOS Hernando FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 10:51:10-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVA PRIETO Maria Del Carmen FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 11:29:59-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 24 **de** marzo **de** 2023

Con acuerdo del Consejo Directivo,

pasó al archivo. —

HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N° 502/2021-CR, QUE SANCIONA CON CADENA PERPETUA TODAS LAS MODALIDADES DEL DELITO DE FEMINICIDIO

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ECHAIZ DE NUÑEZ IZAGA Gladys Margot FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 15:37:05-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CHIRINOS VENEGAS Patricia Rosa FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/12/2022 17:28:37-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALEGRIA GARCIA Luis Arturo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2022 10:31:26-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SOTO PALACIOS Wilson FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2022 17:12:54-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CRUZ MAMANI Flavio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2022 15:50:55-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TUDELA GUTIERREZ Adriana Josefina FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/12/2022 16:41:15-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/12/2022 16:27:57-0500

mp.dictamenes@congreso.gob.pe

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: miércoles, 28 de diciembre de 2022 10:58
Para: syahuana@congreso.gob.pe
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: a77aa7ba46e4e106695b279789193e87.pdf

[Solicitante]: syahuana@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: EN LA UNDECIMA SESION ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ACORDO LA DISPENSA DEL TRAMITE DE LECTURA Y APROBACION DEL ACTA PARA EJECUTAR LO ACORDADO. DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N° 502/2021-CR, QUE SANCIONA CON CADENA PERPETUA TODAS LAS MODALIDADES DEL DELITO DE FEMINICIDIO".
[Fecha]: 2022-12-28 10:58:09
[IP]: 94.188.207.218

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.